

# Prejuicios, ideologías y algunas causas de la violencia en Colombia

Por Jorge Armando Rodríguez <sup>\*</sup>/

La hipótesis más controvertida sobre la violencia que padece Colombia, la que crea las fidelidades más ciegas o hace perder los estribos aún a las mentes más lúcidas, la que toca, en fin, las fibras más sensibles de la conciencia colectiva, atribuye el fenómeno a la pobreza y la desigualdad o, en más en general, a la exclusión económica y social. No es sorprendente, entonces, que los sangrientos acontecimientos recientes y pasados, cuya sucesión ya forma una cadena tan larga que se diluye en la memoria, tiendan a interpretarse a la luz de los *pre-juicios* favorables o contrarios a dicha hipótesis. Algunos sicólogos sostienen, y el argumento me parece convincente, que para no tener que pensar todo desde el principio cada vez que encaramos la diversidad de episodios e incertidumbres de la vida, los humanos acudimos a nuestro acervo de pre-juicios. Después de todo, ellos nos ahorran tiempo y energía. En ocasiones se hace necesario, sin embargo, reexaminar nuestras concepciones pre-fabricadas, especialmente aquellas que nos han conducido a fracasos repetidos. Y eso puede ser lo que está reclamando el holocausto colombiano.

## **El poder de las ideas**

Para llevar a cabo los actos de barbarie que nos agobian se requieren ciertas creencias, cierta ideología, cierto estado de la mente. Las ideas tienen poder, penetran hasta los últimos pliegues del cerebro, llevan a los seres humanos a actuar, y les prestan las justificaciones que sus acciones necesitan. En este sentido, las ideologías extremistas *también* son una causa de la violencia en Colombia. Las guerras no pueden existir sin determinadas ideas y creencias tanto de los combatientes como de los demás miembros del conglomerado social; las guerras no son sólo una cuestión de batallas físicas. Las interpretaciones y análisis que se ofrecen sobre las masacres de Bojayá o Tres Esquinas, de los carros-bomba en Arauca o Bogotá, o de los cuerpos despedazados que bajan por los ríos, para mencionar apenas algunos casos, bien pueden de hecho fomentar o inhibir el conflicto armando. Algo semejante acontece con las recomendaciones que se formulan.

Así, por ejemplo, pedirle al Estado que declare la paz en forma unilateral, al margen de lo que hagan la guerrilla y el paramilitarismo, incluso si estos grupos dan muestras fehacientes de estar empeñados en la guerra, no es necesariamente una propuesta a favor de la paz. Lo más probable es que dicha propuesta termine convirtiendo al Estado y a la ciudadanía en *carne de cañón*, por la sencilla razón de que la paz no es un asunto unilateral. La negociación es en principio mejor que la guerra, pero para negociar se necesitan dos, y ambos, no uno solo, con disposición demostrada de transigir. No debería perderse de vista que el camino del infierno está plagado de buenas intenciones.

Las llamadas condiciones objetivas del conflicto armado (v.g., la pobreza, la desigualdad) son determinantes, en contra de lo quisieran algunos, pero como escribe el historiador William B. Taylor en su obra *Magistrados de lo Sagrado*, a propósito de la cultura política y religiosa en el México del siglo XVIII, “Para demostrar las conexiones entre las fuerzas económicas y la acción política se requieren más que casos aislados o afirmaciones tajantes sobre ‘las masas’, o sobre comunidades enteras actuando en forma concertada. ¿Quién en realidad se juntó a las fuerzas insurgentes en diferentes lugares? ¿Cuándo? ¿Estaban ellos entre los de mayores privaciones? ¿Se veían a sí mismos como particularmente privados de algo?” (Me pregunto, de paso, si existen en Colombia estudios con el rigor, la sutileza y el grado detalle sugeridos por Taylor. La mayoría de los que he leído son más bien discursos repletos de afirmaciones tajantes y románticas sobre las ‘masas’.) Las ideologías a menudo cobran vida propia, al punto que su relación con las condiciones que pudieron haberle dado origen a un conflicto, como la disputa por la apropiación de rentas o la exclusión económica y social, se torna difusa y a veces se desdibuja por completo. Una parte considerable de lo que hacen Castaño, Marulanda y compañía puede, en efecto, explicarse por sus creencias, concepciones y prejuicios (no digo valores, porque en estos casos es muy dudoso que quede algún vestigio), y, probablemente sin quererlo, se ve refrendado, cuando no se ve incitado, por algunas creencias, concepciones y prejuicios enraizados en la conciencia colectiva, en el tejido social. Con todo, de ahí no se sigue que el público en general deba compartir la responsabilidad por unos crímenes que no ha cometido.

---

\* / Correo electrónico: jar22@pitt.edu

Hoy en día, la guerrilla y el paramilitarismo no sólo se alimentan mutuamente sino que se necesitan el uno al otro para justificar su existencia. Desde el punto de vista sociológico, no son organismos ajenos entre sí. Ambos comparten el desprecio por los más elementales principios democráticos, ambos emplean el terror como fin y como medio, ambos se nutren de la savia que les suministra el dinero del narcotráfico, y ambos comparten una mentalidad que los protege o los hace inmunes a la culpa, como si los muertos que dejan a su paso no fueran producto de un acto deliberado. El *guerrillo-paramilitarismo*, o la unidad de lo diverso, como diría Marx. Un estudio que acabo de leer muestra que la presencia de un grupo armado en una determinada parte del territorio colombiano de inmediato multiplica la tasa de homicidios en los municipios vecinos, muy por encima de la tasa de homicidios directamente atribuible al grupo en cuestión. Eso significa que el binomio guerrilla-paramilitarismo causa más daño del que comúnmente se le achaca, y que la violencia de unos refuerza la de los otros. Parece, pues, que están más emparentados de lo que ellos mismos estarían dispuestos a admitir.

A nivel individual y, con mayor razón, a nivel social es difícil resolver los problemas sin haberlos asimilado y más difícil aún si no reconocemos su existencia. No obstante que en estos terrenos el consenso no es posible ni deseable, el estado del debate público en Colombia indica que algunos problemas colectivos están en mora de ser reconocidos políticamente como tales (v.g., la exclusión social). Con todo, ¿debemos dejarnos arrastrar por el canto de sirena del despotismo, armado o ilustrado, en aras de corregir, supuestamente, los defectos de la democracia? Una respuesta negativa a este interrogante no implica, ni mucho menos, que debamos conformarnos con las reglas del juego que tenemos. El fin no justifica los medios. La búsqueda de una sociedad justa por medios pacíficos y democráticos es, creo yo, un propósito que vale la pena por sí mismo, *cualesquiera* que sean las causas de la violencia colombiana. El uso arbitrario y despótico de la violencia, que para el binomio guerrilla-paramilitarismo en un principio constituía un medio, un instrumento para la consecución de sus fines (o al menos eso decían sus voceros y sus apologistas), de hecho terminó siendo su objetivo, su razón de ser.

Quienes se aferran a la tesis de las causas objetivas de la violencia en Colombia sin realizar las debidas mediaciones, como a mi juicio b hacen muchos de sus defensores, no caen en cuenta que esa tesis, expuesta en la forma tan mecánica y simplista en que lo suelen

hacer, termina disculpando en la práctica no sólo a la guerrilla sino también al paramilitarismo. (Tal y como están las cosas en el país debo agregar algo que debiera ser obvio: que defender el punto de vista en cuestión no los hace en modo alguno responsables de los desmanes de esos grupos. Lo que está en discusión son las implicaciones políticas de una concepción). Los paramilitares bien podrían alegar, por ejemplo, que sus masacres obedecen a la pobreza o al desempleo, o la exclusión social si se quiere, que se vieron ineludiblemente compelidos a cometerlas por las causas objetivas, en otras palabras, que a ellos no les cabe responsabilidad alguna. Que ellos, al igual que la guerrilla, están sometidos a las leyes inexorables que determinan el desarrollo de la historia y de la sociedad capitalista. Quizás esta sea una buena razón para que los exponentes de la versión simplista de la tesis de las causas objetivas de la violencia empiecen a reconsiderarla. No abrigo demasiadas ilusiones al respecto, sin embargo. Las ideas suelen ser muy testarudas.

Más todavía, la extendida creencia según la cual la violencia extraordinariamente alta observada en Colombia no cesará sino hasta cuando desaparezca casi todo rastro de pobreza e iniquidad, hasta cuando no quede casi vestigio alguno de exclusión, es autodestructiva y, gústenos o no, propicia su persistencia. Según esa lógica, los herederos y seguidores de Hitler en Alemania, de Stalin en Rusia y de Pol Pot en Camboya aún hoy estarían cometiendo sus asesinatos en masa, puesto que algunas de las causas objetivas de esas violencias —de esos holocaustos y purgas— no han sido removidas, o sólo lo han sido de manera parcial. Si Colombia fuera una sociedad más equilibrada, si no tuviera una de las distribuciones de la riqueza y el ingreso más desiguales del mundo, a los grupos armados irregulares les quedaría más difícil reclutar militantes y conseguir adeptos. No me cabe duda de eso. De manera que reducir la pobreza, o construir una sociedad más incluyente desde el punto de vista social y político, debe ser parte de la estrategia contra la violencia. Pero creer que lo que hay que hacer contra el terrorismo y los proyectos de exterminio, o incluso contra las formas de criminalidad menos “ilustres”, es sentarse a esperar hasta que el índice de necesidades básicas insatisfechas o el coeficiente Gini —un indicador de desigualdad en la distribución del ingreso— alcancen los niveles de Noruega o Canadá, me parece... ¿cómo calificarlo?, ¿ingenuo?, ¿cínico?, ¿irresponsable? En el largo plazo todos estamos muertos, como dijo Keynes, pero en Colombia demasiada gente muere en el corto plazo, y no precisamente de muerte natural. Reducir la violencia asociada al binomio

guerrilla-paramilitarismo mediante el ejercicio de la *coerción legítima* del Estado, preventiva y reactiva, dentro de los límites del estado de derecho, no sólo es posible sino que también es una estrategia válida y necesaria, así como lo es impedirles, o por lo menos dificultarles, el acceso a las armas y al dinero con que se financian. Más allá de las llamadas causas objetivas, hay ideologías, prejuicios y creencias, al igual que recursos físicos y financieros, que favorecen la continuidad del conflicto armado. Y también hay, por supuesto, daños o consecuencias que evitar.

### **La pobreza de ciertos radicalismos**

El radicalismo que se reclama de izquierda (¿merece ser llamado de izquierda?), sobre todo el que adopta formas violentas, por lo general aspira a cortar todos los males sociales de raíz y se ofrece como el único camino para conseguirlo. A sus ojos, cualquier otro propósito es demasiado modesto; cualquier otro camino, un extravío. Quiere cambiar el mundo, así tenga que liquidar a todo el que se oponga a su utopía, a su idea de bienestar (¿el bienestar de los sepulcros?). Los matices no son precisamente su fuerte. Las elites colombianas en verdad exhiben rasgos patrimonialistas y han tendido a usar el Estado como un instrumento de preservación de privilegios. En balance, con todo y las excepciones que hay, me parece que históricamente han cumplido un papel más bien mediocre. Pero la retórica de la culpa colectiva tiene sus límites, que con frecuencia son ignorados por conveniencia. Siguiendo la lógica de esa retórica, habría que “ajusticiar”, por ejemplo, a Rafael Nuñez y Miguel Antonio Caro, ya que tuvieron una injerencia considerable en la Constitución de 1886, que reguló la vida política nacional por casi 100 años. No obstante, se olvida un pequeño detalle: Ellos, Nuñez y Caro, hace rato que están muertos, según la evidencia disponible (a propósito, ¿fue mala en realidad la Constitución de 1886 y, si lo fue, qué tan mala fue?). Echarle la culpa específicamente a este o aquel empresario, a esta o aquella señora, miembros ambos de la elite colombiana de comienzos del siglo XXI, de los males colectivos que nos aquejan raya en lo ridículo, entre otras cosas porque lo más probable es que ellos sólo hayan participado en la “definición de los destinos de la patria” de manera marginal, y apenas durante su tiempo de vida, y es una injusticia hacerlos individualmente responsables de todo el legado de la historia. Y ello sin considerar que, en el supuesto de que les quepa responsabilidad por su contribución marginal, el

“ajusticiamiento” que practican los grupos armados en cuestión es enteramente arbitrario y carece de toda legitimidad.

A nombre de la defensa de los derechos de propiedad, especialmente del latifundio, o, en general, a nombre de la defensa del *status quo* se han ejecutado los atropellos más atroces, incluso el exterminio de grupos enteros, como ocurrió con la UP. En el capitalismo la propiedad es ciertamente un derecho, pero sólo en la medida en que se adquiriera en forma legítima y en que se respeten los derechos de los demás, tales como los derechos a la vida, a la libertad de expresión y al ejercicio de la actividad política. Pero para la extrema derecha esas son meras nimiedades. No obstante que el paramilitarismo es a todas luces inadmisibles, la evidencia indica que ha habido numerosos episodios en los que el Estado o quienes lo representan han pecado tanto por omisión como por acción, a menudo con el apoyo y la complacencia de algunos poderosos sectores de la llamada sociedad civil. Tenemos que asegurarnos de que nada de eso vuelva a suceder.

La construcción de democracia requiere algo de paciencia, la paciencia necesaria para persuadir, desplegar las destrezas e instintos del político, y formular proyectos políticos atractivos y creíbles, así como también la aceptación de que las convicciones que uno tenga sobre el mundo social deben ser transigidas con los demás. Nada de esto compagina con la noción de cambio de muchos radicales, cambio que debe ser total y vertiginoso, ni con su idea de sociedad, que debe ser exactamente como se le antoje al líder mesiánico de turno. Dicen querer reformas, pero no contribuyen a su implantación, temiendo que las reformas resulten exitosas, lo cual desde luego le resta justificación a su existencia.

Albert Hirschman ha descrito con mano maestra tal modo de pensar: “El razonamiento radical con frecuencia la ha emprendido contra los reformadores por ignorar las ‘estructuras’ básicas del sistema social y por alimentar y propagar ilusiones sobre la posibilidad de introducir, sin cambios previos ‘de fondo’ de esas estructuras, estas o aquellas mejoras ‘parciales’, tales como más democracia, educación primaria universal, o ciertos programas de bienestar social. Si de hecho se adoptan medidas en esa dirección, el siguiente paso es argüir que el patrón preexistente de dominación no ha cambiado en realidad: Sólo se ha hecho más intrincado descubrir cómo opera la dominación... A estas alturas, se recurre a metáforas como ‘máscara’, ‘velo’ y ‘disfraz’, y el analista social

radical, como su contraparte conservador, se siente obligado a levantar el velo, a quitar la máscara, a hacernos ver a través del disfraz.” En el fondo es una posición bastante conservadora. Cualquier reforma económica y social estaría de antemano condenada al fracaso, en la medida en que la “estructura básica” del sistema se mantiene intacta.

El mensaje radical suele adoptar un tono profético. Quizás en ello reside su atractivo, su capacidad de seducción. En Colombia no escasean las posiciones extremistas, algunas francamente delirantes, ya sea de derecha o de izquierda. Tengo, sin embargo, la impresión de que poco se les controvierte, en buena medida sin duda porque infunden miedo. Pero habrá que sobreponerse, supongo. Aun si reflejan una justa insatisfacción con el mundo en que vivimos, las posturas radicales no deberían aceptarse como verdades a priori, en forma casi instintiva. Tampoco deberían ignorarse, dando a entender que sus preocupaciones son indignas de ser sometidas a escrutinio.

### **Opiniones y hechos**

Lo ideal sería que se esclarecieran los hechos, como se suele decir. Cuanto antes, mejor. Lo ideal sería que se supiera quién puso cada bomba o ejecutó cada masacre, quién arrasó con este o aquel pueblo perdido en las montañas o quién asesinó a un dirigente sindical o a un estudiante. Y también cómo se llevó a cabo, quién dio la orden, quién puso la plata, dónde y cuándo exactamente. Y, desde luego, el porqué. Ese es precisamente el papel que se supone debe cumplir el sistema judicial. Si no se investiga o averigua bien, con las pautas propias de un estado de derecho, fácilmente se puede terminar acusando o condenando a inocentes. Pero, cabe preguntarse, debería la gente común y corriente, o el pueblo si se quiere, o los medios de comunicación y los políticos, por ejemplo, esperar el veredicto judicial antes de opinar, de formarse su propia interpretación. La respuesta a este interrogante es negativa, a mi manera de ver. Dado que muchos de estos episodios, por llamarlos de alguna manera (en rigor, se trata de terrorismo, sin esguinces), se planean y ejecutan clandestinamente, con la intención manifiesta de evitar que sus autores sean identificados, lo más probable es que en efecto un buen número de ellos nunca se esclarezca. Y a eso habría que añadirle la ineficacia, la torpeza y, en algunos casos, la complacencia de las autoridades. En estas condiciones, pedir que no se emita opinión o juicio público sobre los autores de un atentado o de una masacre hasta tanto no se conozca

toda la verdad equivale, en la práctica, a pedir que no se emita ninguna opinión o ningún juicio.

¿Qué hacer? Parece un callejón sin salida, dado que para vivir en sociedad los humanos necesitamos interpretar y dado que sigue siendo cierto que las opiniones y los juicios a priori pueden a la postre resultar infundados. Pero quizás haya una salida. Considerando que las matanzas ejecutadas por los grupos extremistas de izquierda y de derecha tienden a retroalimentarse, es decir, a generar repuestas y contra-respuestas en una espiral creciente y continuada, como en efecto lo muestra el caso colombiano, y como esa espiral es individual y colectivamente destructiva, agravando los problemas que real o supuestamente le dieron origen, la respuesta colectiva más razonable (al menos en lo que concierne a las opiniones y los juicios emitidos en el ámbito público, en la charla con los amigos o en la columna periodística), probablemente sea responsabilizar *sin distingos* al binomio guerrilla-paramilitarismo *por todos y cada uno* de los actos de barbarie que, con un grado significativo de certeza, se sabe que han sido cometidos por alguno de esos dos grupos, aunque no se sepa exactamente cuál. Si se llegan a esclarecer los hechos habría, desde luego, que asignarle a cada uno su correspondiente cuota de responsabilidad.

¡Ah!, dirá quizás algo perplejo el lector, la estrategia de atribuirle al binomio guerrilla-paramilitarismo los actos de barbarie todavía no esclarecidos no le da cabida a los crímenes de los narcotraficantes o de la delincuencia común. Y no le faltaría razón. No dije que el asunto fuera fácil. Si come como pato, si camina como pato... entonces es un pato. Si luce como un crimen de los narcos, entonces usted verá si no se lo endilga a los narcos. A estas alturas ya debería ser claro, sin embargo, lo que *no* debería hacerse. Lo que no debería hacerse es lo que hacen, por ejemplo, algunos columnistas que llevan años y años condenando los crímenes de un solo bando, y guardando silencio sistemático sobre los crímenes de los demás bandos. Tanto que uno lee el periódico o revista del domingo, o de cualquier otro día, y ya sabe con certeza qué esperar de cada columnista. ¿No será que de hecho, al margen de si es o no intencional, le están dando la munición intelectual e ideológica al bando que nunca fustigan, frente al cual se hacen los de la vista gorda? Los silencios a veces son más elocuentes que las palabras. Está bien que fustiguen a un bando, pero ¿acaso no deberían hacer lo mismo con el otro? (claro, cabe la posibilidad, la mera

posibilidad, de que no les disgusten para nada los desmanes de ese otro bando, cualquiera que sea). Y lo mismo vale para quienes no somos columnistas.

El profesor Jesús Antonio Bejarano, asesinado en los predios de la Universidad Nacional en Bogotá, insistió hasta el cansancio en la necesidad de distinguir entre explicación y justificación. Hay actos que aún si son explicables resultan simple y llanamente injustificables, desde cualquier ángulo que se les mire. Sin embargo, la agudeza de su análisis apenas empieza a calar.